

Anticipo de regalías



EMILIO JOSÉ ARCHILA PENÁLOSA
Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

En varios medios de comunicación se han escuchado por estos días las voces de la academia y el clamor de gobernadores y alcaldes de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, las zonas PDET, para que el Congreso de la República de vía libre en esta legislatura a una fórmula clave para acortar las brechas que se mantienen entre el resto del país y estas regiones, así como para la reactivación de las economías territoriales duramente golpeadas por la pandemia. El propósito es cumplir con el mandato constitucional sobre el anticipo de 7% de las regalías por la explotación de gas y petróleo.

Se trata de los municipios donde el gobierno del presidente Iván Duque avanza en la ejecución de los PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, donde viven 6,6 millones de colombianos beneficiados en un proceso que no puede tener retorno para superar las condiciones de injusticia, violencia y falta de oportunidades.

El Congreso tiene la facultad de anticipar esos recursos para

ser invertidos en municipios PDET, ya no de aquí a 2032, sino en los próximos tres años. Aun cuando el monto debe estar atado a las variaciones de la cotización del dólar y los vaivenes del precio del petróleo, en las condiciones actuales del país y el mundo, debemos ser agresivos en el cálculo y no limitarlo a un simple criterio de vigenias futuras.

LA RUTA DEL ANTICIPO ES UN COMPROMISO CON LA PAZ Y CON EL FUTURO.

El Gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, como presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, y el Director Ejecutivo de esa organización, Carlos Camargo, lo mismo que un número muy importante de algunos de los economistas más sobresalientes de Colombia ya han resaltado la ruta del anticipo de regalías como una urgencia para la reactivación económica, en el entendido de que el reto del Estado es hoy garantizar proyectos de inversión intensivos en mano de obra. Y ponen de presente que durante el gobierno del Presidente Iván Duque se han aprobado aproximadamente \$1.3 billones para municipios PDET a tra-

vés de un organismo clave como el Ocad paz.

Desde los territorios, las gobernaciones y las alcaldías están promoviendo un mayor número de proyectos que superarán la disponibilidad de recursos en esta fuente de financiación.

Consideran en este escenario que se trata del momento oportuno para dar este paso con el anticipo de las regalías, en el entendido, según lo mencionan, de que "tras la pandemia, será muy difícil para millones de compatriotas encontrar un escenario de progreso y oportunidades". Es clave, en el propósito de cerrar las brechas de la inequidad, escuchar la voz de las regiones.

La inversión se haría en obras vitales para la gente, teniendo en cuenta los ocho pilares de ejecución plasmados por las comunidades cuando se construyeron los PDET a partir de 32.000 iniciativas populares: ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, salud rural, educación rural, vivienda, agua potable y saneamiento básico; reactivación económica y producción agropecuaria, derecho a la alimentación y reconciliación, convivencia y paz. Es un compromiso con la paz y con el futuro.

¡El Honorable Congreso tiene ahora la palabra y confiamos en ellos!

TRIBUNA PARLAMENTARIA

Tiempos de crisis: oportunidades de reinención

Cuando la actual Indonesia vivió la erupción del volcán Tambora en 1815, el incidente costó la vida a 60.000 personas. Hubo cambios climáticos globales, miles de cultivos quedaron destruidos y una oleada de hambruna, enfermedades y pobreza golpeó a la población. En ese momento la sociedad local enfrentó una disyuntiva: se alimentaban ellos o a los caballos que los transportaban. El desenlace fue fatal para los caballos, pero benefició a los humanos. Poco tiempo después, ante la escasez de caballos que transportaran personas, un inventor alemán nos presentó la bicicleta.

Hoy, dos siglos después, la pandemia del covid-19 le recuerda a esta generación que, sin distinción de raza, posición social, nacionalidad, credo o religión, todos somos igualmente vulnerables ante un enemigo minúsculo que nos tiene



ERASMO ZULETA
Representante a la Cámara

en jaque. Ciertamente, esta crisis no es más que una advertencia de que para garantizar nuestra existencia necesitamos convivir armónicamente con la naturaleza. Lo anterior, al igual que hace dos siglos, nos plantea una disyuntiva: ¿es viable seguir con el modelo de desarrollo actual o hay que replantearlo en busca de una mejor coexistencia con el ambiente?

Tan solo seis meses después del inicio de la pandemia, y cuando aún su golpe más fuerte no nos llega, caben pocas dudas con respecto a nuestro modelo de desarrollo, el cual debe dar un vuelco hacia modelos más sostenibles. Es el punto donde el agro cobra especial protagonismo como actor fundamental en la economía.

Sin embargo, el agro colombiano ha perdido relevancia frente a lo que era en tiempos pasados. En varias ocasiones he dado ejemplos sobre cómo este sector ha sido relegado históricamente. Mientras en 2019 la participación de ocupados del sector con respecto al total nacional fue de 16%, en 2003 esta participación fue 21%.

De igual forma, tenemos un campo que podría ser fuente de riqueza y oportunidades al abastecer la demanda nacional y exportar alimentos a otros países, pero las exportaciones no despegan. En 2018, las exportaciones de productos agropecuarios, de alimentos y bebidas per cápita de Colombia fueron de US\$147 millones, mientras las de Chile fueron de US\$1.288, las de Argentina de US\$774, las de Ecuador de US\$617, y las de Brasil de US\$446. El fortalecimiento del sector es una tarea que no da más espera. Las soluciones de mediano y largo plazo ya están formuladas en informes como los de la Misión para la Transformación del Campo.

Quiero resaltar el acompañamiento que en el país ha venido realizando la FAO, quien de la mano del Ministerio de Agricultura, ha iniciado la elaboración de Planes de Desarrollo Agropecuario con enfoque Territorial para algunos departamentos. Pero resulta alarmante que la FAO encontró que los precios de los insumos se habrían incrementado hasta 30% en la pandemia. Sus mayores efectos negativos se han presentado en zonas ganaderas y hortofrutícolas, como Córdoba, donde siete de cada 10 productores, manifestaron que el alto precio de los insumos fue su mayor inconveniente. Además, el transporte para sacar los productos y comercializarlos es otro problema que enfrentan los agricultores para ejercer su actividad durante la pandemia.

En reiteradas ocasiones he dicho que el Estado tiene una deuda histórica con el campo que debe saldarse cuanto antes. En estos meses, donde la pandemia nos ha obligado a priorizar las necesidades, el agro ha sobresalido como una pieza clave de la que dependemos todos. Ojalá que cuando pase la pandemia, el campo no sea sometido nuevamente al olvido que lo azota desde hace décadas.

El Pacífico y la Orinoquia: más cerca



JUAN ESTEBAN ÁNGEL BORRERO
@juanes_angel

La Conexión Pacífico-Orinoquia - CPO, proyecto vial de 1.490 kilómetros, que busca conectar por primera vez a Buenaventura y Puerto Carreño, atravesando el Valle del Cauca, Huila, Tolima, Meta y Vichada, e impactando de forma directa e indirecta a 17 departamentos, es quizás la obra de infraestructura más ambiciosa y estratégica que tiene hoy nuestro país.

Por su difícil topografía, Colombia ha estado conectada históricamente de norte a sur, ya que las rutas colonizadoras se hicieron a lo largo de los ríos Magdalena, Cauca y Atrato.

Esa orientación era necesaria porque ante la ausencia de caminos y carreteras, las vías fluviales permitían el comercio y la colonización. Ahora, con los cambios en la geopolítica y el surgimiento de los gigantes asiáticos, el Océano Pacífico ha adquirido mayor relevancia hasta el punto de ser llamado el Mar del Siglo XXI, y donde Colombia y en especial Buenaventura ocupan un lugar preponderante.

El sector público y privado tendrán el reto de trabajar jun-

tos en la coordinación, articulación y búsqueda de financiación. Sin embargo, la perspectiva del proyecto se vislumbra promisoriosa, luego de darse a conocer el estudio de impacto socioeconómico presentado por ProPacífico y donde se estima que los beneficios lograrán superar los costos de inversión, operación y mantenimiento de la obra, hasta en 96%.

La CPO no solo generará la conexión transversal de Colombia, impactando 350 municipios mediante el fortalecimiento de vías secundarias y terciarias, sino que promete una significativa reducción en costos de transporte y ahorros en tiempos de viaje por cerca de \$30.000 millones anuales, así como el impulso a la generación de unos 250.000 empleos, de acuerdo con el estudio de impactos, fortaleciendo la economía del país y de los territorios involucrados.

Los beneficios también se ven reflejados en la ampliación de la frontera agrícola de la Orinoquia en más de cuatro millones de hectáreas que podrían representar más de 10 millones de toneladas de alimentos al año, incrementando el potencial de la zona de influencia y los beneficios por sustitución de importaciones y ampliación de la base exportadora, con la posibilidad de in-

corporar nuevos territorios a los mercados domésticos y externos.

Este es sin duda un proyecto relevante para el desarrollo económico, social y de seguridad de Colombia pues, además de los aspectos comerciales y logísticos, la vía reconfigurará el diálogo territorial de nuestro país, al conectar zonas históricamente fragmentadas o aisladas.

Por obvias razones, la pandemia ha obligado a que el país enfoque gran parte de sus esfuerzos en la atención de la emergencia y la reactivación económica. Parte del éxito para superar la crisis y salir fortalecidos de ella, está en no perder de vista los proyectos de largo plazo que serán detonantes de desarrollo e impulsores de la economía, como es el caso de la Conexión Pacífico - Orinoquia.

Su realización será una muestra contundente de liderazgo nacional, proveniente del trabajo articulado y a largo plazo entre el sector público, privado y civil de varios departamentos, junto con el Gobierno Nacional, para planear y llevar a feliz término esta trascendental obra, superando los obstáculos que puedan acarrear los límites de los periodos de presidentes, gobernadores y alcaldes. El desafío está planteado.